

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 17º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-12294-2018
CARATULADO	: ABARCA/CONSEJO DE DEFENSA DEL
ESTADOI	

**Santiago, veintiocho de Marzo de dos mil diecinueve**

Vistos:

Con fecha 23 de abril de 2018, mediante presentación ingresada por Oficina Judicial Virtual, comparece don Omar Fernando Cabrera Cabezas, abogado, domiciliado en pasaje Dr. Sotero del Río N° 326, oficina N° 409, comuna de Santiago, en representación judicial de don Carlos Fernando Abarca Riveros, mecánico, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por su presidenta del Consejo de Defensa del Estado por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, con domicilio en calle Agustinas 1687, edificio Plazuela de Las Agustinas, Santiago.

Manifiesta que los hechos descritos en este acápite han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en sus informes Valech N° 1 y Valech N° 2. Indica que relatará de manera sucinta, las torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos y degradantes a los que fue sometido su representado por agentes del Estado y que constituyen el fundamento fáctico de su demanda.

Relata que la Comisión ha reconocido la condición de víctima de prisión por razones políticas y de tortura a través de un proceso colegiado de evaluación de los antecedentes de cada caso en particular, dirigido a la identificación de elementos de juicio objetivos, que permitieran formarse convicción moral sobre dicha condición. Señala que cada caso y cada detención fue objeto de un riguroso proceso de análisis que comprendió la validación de la información proporcionada por los declarantes por medio de investigación documental, antecedentes provenientes de organismos públicos, referencias de organismos de derechos humanos, de organizaciones de víctimas, información de testigos calificados, investigaciones en bases de datos disponibles y, en un número significativo de casos, mediante una segunda entrevista a la víctima o a testigos. Agrega que un número considerable de personas que prestaron testimonio ante la Comisión adjuntaron certificados de los organismos que practicaron la detención o mantuvieron a los detenidos en recintos de su dependencia y que otras presentaron documentos tales como salvoconductos, tarjetas de control, certificados de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), sentencias judiciales o piezas procesales que dan cuenta de la privación de libertad.



Foja: 1

Tras referir una serie de datos estadísticos acerca de las personas que fueron torturadas en dictadura, expresa que su representado fue reconocido por la Comisión de Prisión Política y Tortura de Chile como víctima de vejaciones y torturas bajo el rol N° 36 (Comisión Valech N° 1), transcribiendo el relato en los siguientes términos:

*“Me encontraba trabajando cuando se produce le golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende. Nuevamente las cosas se complicaron para mí y mi familia y fue así como el día once de septiembre de 1973, no pudimos ir a trabajar. El día doce pudimos ir a trabajar, pero todas las puertas de entrada estaban cerradas y después de un par de horas empezaron a dejar entrar al personal de uno por uno. Cuando me correspondió entrar, me llevaron custodiado por personal militar a otro lugar con otro compañero de trabajo (Guillermo Pedro) y fuimos obligados a tirarnos al suelo y con las manos en la nuca como dos personas delincuentes y después de un par de horas fuimos llevados en una camioneta a la base aérea de Quintero, en donde fuimos interrogados uno por uno durante un buen tiempo; nos dejaron en libertad más o menos como a las seis de la tarde, teniendo que hacer muchas combinaciones para llegar a tiempo a mi casa de Playa Ancha.*

*Pasaron ocho días desde que nos detuvieron en Quintero y un día veinte de ese mes de septiembre a las cinco de la mañana irrumpieron en mi casa un grupo de militares con orden de registrar todo e interrogar a toda mi familia, separando a los niños y a Gladys de mí; después registraron toda la casa dejándola toda desordenada y preguntando donde guardábamos las armas y como no encontraron nada, me llevaron detenido y toda la familia quedo muy preocupada. Me llevaron al regimiento Maipo en Playa Ancha, en donde junto con otros que estábamos detenidos, nos metieron a un vehículo militar y nos llevaron al muelle donde se encontraban los barcos que tenían algunos presos políticos; los barcos eran “La esmeralda” y el buque mercante “Lebu”, en el cual me correspondió embarcar. Indudablemente todo eso no fue fácil para los que íbamos detenidos porque nos trataron bastante mal. Cuando nos llevaron adentro de las bodegas del barco, la sorpresa fue grande, porque dentro de ellas éramos cientos de presos, aunque mucho no creerán, los primeros tres días no nos dieron ni una gota de alimento ni agua; en la noche hacía mucho frío, menos mal que yo antes de que me sacaran detenido de la casa, logré ponerme una chaqueta de cuero forrada que la compañía nos daba en el trabajo, pero mucha gente tenía muy poca ropa, porque no alcanzó a ponerse mucha ropa antes de ser detenido; además de frío y hambre, las bodegas tenían mucho carbón de piedra ( carboncillo), porque ese barco era carbonero.*



Foja: 1

*Mi permanencia en ese barco duró diez largos días y en esos días de reclusión aparecieron varios compañeros de trabajo, incluso el gerente de la empresa Chilectra. En la noche. Todos éramos obligados a subir a cubierta con la vista vendada y nos llevaban a una sala en donde éramos interrogados porque querían saber quiénes eran las personas que tenían las armas y las conexiones del partido, éramos tratados muy mal, tanto física como psíquicamente. Al cuarto día nos empezaron a subir a cubierta para darnos un poco de comida y que coincidencia, desde la cubierta, podía ver la casa de mi suegro y me acordaba de mi familia; por otra parte, Gladys se movilizaba para poder ubicarme, lo cual dio frutos y pudo mandarme un chal y unas vitaminas y algo para comer, pero eso no llegó a tiempo. Los días en el barco fueron largos y denigrantes, porque en las bodegas no había agua ni servicio higiénico; para hacer nuestras necesidades, nos tenían un tambor recortado en medio del cual se ponía una tabla y allí uno debía sentarse, si así puede llamarse, para hacer las necesidades y todos los días había que ir a botarlo al mar.*

*Uno de esos días, que son del destino de cada uno, me ofrecí para ir a botar el tacho; eran dos personas que tenían que ir, siempre vigilados por un guardia armado, lo cual era igual que en las películas de guerra, de vuelta, después de botar el contenido del tacho, nos devolvimos al barco y cuando divisé el buque de guerra “Almirante Latorre”, me recordé que en él andaba un primo mío y le comenté al guardia que nos vigilaba que yo tenía un primo en ese barco y me preguntó que como se llamaba y le dije su nombre, tomando nota de éste, no sé si para saber si estaba involucrado con mis ideas o fue realmente de buena voluntad, el hecho es que un día en la noche llegó mi primo para saber cómo me encontraba. Claro que la entrevista fue con la vista vendada y de espaldas hacia él. No sé cuál fue el motivo de esto y así fue que los pocos días llegó un galoneado a cubierta y llamaron a formar y a enumerarse, porque eso era de todos los días que debía hacerse. El galoneado preguntó quién era Carlos Abarca y ordenó que diera un paso adelante y se fue; más o menos después de una hora me llamaron para arriba porque me iba para la casa porque estaba libre. De todo lo que me quedaba de lo que me había mandado Gladys, que al fin había recibido, el chal y unas cuantas vitaminas se las dejé a mis compañeros. Quedé libre más o menos a las cuatro o cinco de la tarde, no recuerdo la hora exacta. Al salir libre pedí mi certificado que justificara mi libertad y me lo dieron y lo tengo en mi poder hasta estos días. El camino desde el barco hasta la salida del muelle es largo y ahí me esperaba Gladys y Carlos y nos fundimos en un gran abrazo y muchas lágrimas. En casa nos esperaban mis otros hijos y un montón de amigos.*

*Después de esos acontecimientos, pasaron dos largos meses en que no sabía qué pasaría con mi trabajo y había que vivir con esa incertidumbre, lo cual me llevó a contactarme con algunos compañeros que estaban en la*



Foja: 1

*misma situación y nos pusimos de acuerdo para ir a la gerencia en Valparaíso para plantear nuestra situación. La gerencia estaba a cargo de un capitán de la marina de guerra, pedimos una entrevista y nos recibió al grupo que en ese momento estábamos allí, éramos seis personas, le planteamos nuestro problema, del tiempo que estábamos sin trabajar y a la vez sin recibir sueldo y le mostramos los certificados de libertad que teníamos. El capitán comprendió nuestra inquietud e inmediatamente tomó el teléfono y se comunicó con el jefe de planta que se llamaba Rubén Fernández. El capitán nos informó que nos fuéramos inmediatamente a ventanas para empezar a trabajar, se les dieron las gracias correspondientes y nos fuimos a Ventanas, los seis del grupo en mi cacharrito. Llegamos a la central y nos llevaron a una sala de conferencia, ante un capitán que estaba a cargo de la central y nos dijo que él no quería que se hablara de política y no se hiciesen grupos de personas y muchas cosas más con respecto a su disciplina. Nos pusimos a trabajar cada uno en sus respectivos puestos.*

*Las cosas marchaban con una disciplina militar para todo el personal que trabajaba en el centro. Los más afectados por esta disciplina fuimos mi compañero Guillermo Pedro, el soldado, y yo que en ese tiempo era pañolero. Por lo menos, una vez a la semana nos llamaban para molestarnos por cualquier cosa y eso a uno lo mantenía con mucha tensión, lo cual aconteció por un periodo de dos años. Fue tanto lo que molestaron que en algunas oportunidades me sacaron del comedor del casino en donde comíamos y me llevaron a una puerta en donde fui registrado para ver si encontraban alguna evidencia para posible despido o detención. Fue por ello que empecé a pensar en irme para cualquier parte, a pesar que durante veinticuatro años trabajaba en esa empresa, pero para mí era más importante velar por la integridad de mi familia, porque por parte de mis hijos, en el colegio, Carlos tenía problemas por lo mismo que yo sufría. En los colegios a Fernando y Alexis les cortaron el pelo a lo militar, pues en ninguna escuela se aceptó el pelo largo, lo cual a ellos les causó un poco de problemas. Un día me dijo que quería irse del país, a la Argentina; como sabía que tenía problemas en el colegio, le dimos los medios necesarios para su viaje; partió un mes de marzo de 1975 hacia Buenos Aires.*

*Unos meses antes que Carlos se fuera, yo empecé a hacer los trámites en la Embajada de Sud-África y de Australia en Santiago para ver la posibilidad de emigrar, todo iba saliendo bien, nos hicimos los exámenes médicos, nos llamaron a una entrevista, nos mostraron en donde viviríamos y nos fuimos muy contentos a casa, ya que nos dijeron que pronto nos llegaría la visa a nuestra casa. Pasó un tiempo y nos llegó una carta en la cual nos avisaba que el gobierno de Chile suspendía toda clase de convenio con ese país y todo quedó en nada.*



Foja: 1

Mientras tanto Carlos se ubicaba en Buenos Aires trabajando en un hotel en el cual se hizo muy buenas amistades. Por mi parte, me preparaba para dejar el trabajo y marcharme también. Gladys echaba de menos a su hijo Carlos y me pidió permiso para ir a verlo a Buenos Aires. Regreso a Chile contenta porque Carlos estaba bien y fue entonces cuando tomé la decisión definitiva de irme también a Buenos Aires. Renuncié a mi trabajo, se hicieron todos los preparativos para partir, se dejó todo programado para partir yo solo, para ver cómo estaban las cosas por esos lados y a la vez Fernando, Alexis y Lala podían terminar el año escolar. Un día del mes de julio de 1975, me fueron a dejar al aeropuerto, Gladys, Fernando, Alex y Lala. Nos despedimos y yo pasé por la policía internacional y allí empezaron nuevamente mis problemas porque fui detenido y llevado al cuartel de investigaciones de Vicuña Mackenna en Santiago. Afortunadamente Gladys es vivaracha y me siguió hasta el cuartel de policía y llamó por teléfono a unos amigos para que fueran a buscar a Alex y Lala y se quedó solo con Fernando. Estuve detenido hasta más o menos las once de la noche, en que llegó el auto de Valparaíso que venía a buscarme. Le dije a Gladys que dejara a Fernando conmigo y ella se fuera a casa de nuestros amigos junto a los niños.

Cuando dijeron que debía subir al auto porque me llevarían a Valparaíso, les dije que andaba con mi hijo y no le podía dejar solo. Instalaron a Fernando junto al chofer y a mí me pusieron en el asiento trasero y se me dijo que por ningún motivo intentara hacer nada sospechoso porque sería muy peligroso. Cuando llegamos a Valparaíso, en la Plaza Victoria le dijeron a Fernando que se bajara y él no tenía dinero para tomar un vehículo para llegar a nuestra casa de Playa Ancha y a mí me llevaron a un cuartel militar que se llama "Silva Palma". Fui encerrado en una pequeña celda y como a las cuatro de la mañana me sacaron y trasladaron a una sala en la cual fui interrogado sobre lo mismo de siempre, en donde se guardaban las armas y quien era el que mandaba todo esto. Les contesté también lo mismo de siempre, que yo no tenía ni la menor idea de eso de lo que decían. Fui llevado nuevamente a la pequeña celda hasta las siete de la mañana en que nuevamente fui interrogado.

Era tanta la tensión que tenía, que se me cayeron algunas lágrimas de rabia e impotencia y les dije que todo esto que me estaba pasando era exclusivamente culpa de mi jefe, que era el jefe de la planta central Ventanas y les conté mi trayectoria durante mis veinticuatro años en la empresa y que solo fue trabajar y hacer deportes y por supuesto hacer trabajar sindical y ser simpatizante del régimen de Salvador Allende y simpatizante del partido comunista, ese era todo mi delito. Como a las nueve de la mañana fui puesto en libertad. Afuera me esperaba como siempre Gladys que me había ubicado por intermedio de su hermano



Foja: 1

*Normar. Al otro día pude viajar a Buenos Aires, encontrándome con mi hijo Carlos, abrazándonos llorando.*

*Pero la vida tenía que seguir adelante, era tanta la gente que estaba por esos lados, me refiero a chilenos exiliados. En Argentina existían varios centros de refugiados de todos los países, incluyendo argentinos. Me fui a vivir a un hotel con dos chilenos más, pero en ese no tenía nada que ver con los centros de refugiados. En pocos días encontré un trabajo de ayudante de albañil, además, trabajé armando una carpa de circo y, por último, fui a trabajar en el puerto, limpiando las sentinas de los barcos, cuyo trabajo es sucio y en una oportunidad me llevaron detenido toda la noche por estar trabajando sin permiso. Como en ese tiempo había bastantes avisos de trabajo en los periódicos, presente solicitud en varias partes y en el mes de octubre regresé a Chile para comunicarme con mi familia que se podían venir a fines de ese año 1975 a la Argentina, llegando en diciembre de ese año.*

*A mi regreso a la Argentina, fui detenido nuevamente en la Aduana de Chile porque tenía orden de no salir del país, pero afortunadamente andaba trayendo el comprobante de mi última detención en el aeropuerto y se los presenté dejándome pasar. Tuve que correr para alcanzar el vehículo el que ya iba partiendo. Todo esto pareciera que fuera mentira haber pasado por tantas dificultades y siempre pensando en mi familia que tenía que sacar adelante”.*

En lo concerniente al daño reclamado, explica que como consecuencia directa de las torturas producidas a su representado se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Agrega que los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues, aunque hayan transcurrido más de cuarenta años de lo sucedido las personas continúan con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fueron sometidas, además de que muchos fueron obligados, directa o indirectamente, a abandonar el país, sin poder retornar, algunos incluso alejándose de sus familias y otros derechamente ejecutados.

Tras referir una serie de relatos de personas torturadas que hacen alusión a los daños padecidos, el actor expresa que estos daños emocionales, morales y materiales que necesariamente se causaron a las víctimas de torturas, son lo que está pidiendo en esta demanda que sean indemnizados. Agrega que los daños tanto físicos como psíquicos son distintos de persona en persona, sin embargo, todos tienen en común el daño moral. El daño causado es obvio, público, notorio, y no hay quien pueda negarlo caprichosamente. Se trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo a



**Foja: 1**

condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas. Luego de citar jurisprudencia, expone que el daño moral se hace patente por sí mismo en atención a los hechos, es decir, salta a la vista de lo evidente que es. Las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

Concluye que por todo ello, es que en este acto, en la representación que inviste como apoderado del demandante ya individualizado, demanda al Fisco de Chile, por daño moral, como consecuencia directa del secuestro y torturas de que fue objeto, el pago de doscientos millones de pesos (\$200.000.000.-), suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto el monto indemnizatorio que estime el tribunal de conformidad con su apreciación y valorización del daño.

En lo relativo al derecho invocado, sostiene que respecto de los hechos delictuosos narrados precedentemente, es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que a quienes se acusa su autoría, a la fecha de su comisión, eran miembros del Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o Civiles adscritos a las mismas, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública. Agrega que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre ellos cabe destacar el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado “Informe Valech”. Indica que en efecto, en el mencionado Informe Valech, su representado fue reconocido como víctima de Prisión Política y Tortura.

Sostiene que la responsabilidad del Estado, por el daño moral ocasionado a su mandante, emana en primer lugar de un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos, el que se ha desarrollado sobre la base de la jurisprudencia y de la legislación especial, y que es anterior a la fecha de comisión de los hechos juzgados en la presente causa.

Tras explicar una evolución de la responsabilidad del Estado en Chile, afirma que las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resulta aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que en estos casos también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado como son los preceptos citados de la



**Foja: 1**

Constitución de 1925, ergo según dice, la acción que se ejerce en estos autos es imprescriptible.

Seguidamente, expone que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse y todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común. La indemnización comprende -según el artículo 2329- todo daño, por lo que naturalmente está incluido el daño moral. Tras citar jurisprudencia, señala que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios del Ejército de Chile actuando en su calidad de tal, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por su mandante.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, admitirla a tramitación, y -en definitiva- acogerla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la víctima de torturas provocadas por Órganos del Estado de Chile, la suma de \$ 200.000.000.- (doscientos millones de pesos) a don Carlos Fernando Abarca Riveros, ya individualizado, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, equidad y al mérito de autos, todo con costas.

Con fecha 18 de mayo del año 2018, se notificó la demanda en forma personal a doña María Eugenia Manaud Tapia, en representación del Fisco de Chile.

Con fecha 6 de junio de 2018, a través de presentación ingresada por Oficina Judicial Virtual, comparece doña Ruth Israel López, abogada procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contesta la demanda solicitando su total rechazo, conforme a los argumentos que a continuación se exponen.

Tras exponer una síntesis de la demanda, bajo el título “Excepciones, alegaciones y defensas”, opone excepción de reparación integral, y la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante. Explica que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. Añade que sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria, porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que





## Foja: 1

éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas. Indica que ello es así porque no es posible omitir el hecho que las arcas fiscales –que en definitiva están constituidas por los aportes de todos los chilenos– deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad –las que, por cierto, son imprescindibles– pero así también, lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los más directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos acontecidos en nuestro país.

Agrega que este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación, que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. Indica que en este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones, bastando para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. Alega que no debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Afirma que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “*propuestas de reparación*” entre las cuales se encontraba una “*pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas*” y algunas prestaciones de salud. Añade que dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, cuyo mensaje fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “*reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas*”.

Tras referirse a la idea reparatoria que se debatió en el proyecto de ley, sostiene que el marco normativo ha establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional, manifestando que la reparación se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la



Foja: 1

asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Acto seguido, en torno al primer tipo de reparaciones en dinero, expresa que varias leyes la han establecido para las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Manifiesta que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Tras referir una serie de montos que dan cuenta de costos para el Estado, por las indemnizaciones que le ha significado, a diciembre de 2015 (\$706.387.596.727.-). Postula que como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto.

Luego, refiere las reparaciones específicas, particularmente la Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, y afirma que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° s 19.234 y 19.992 y sus modificaciones. Indica que la ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Precisa que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, consigna que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.-

Asevera que el demandante don Carlos Abarca Riveros, según lo informado por el Instituto de Previsión Social, figura calificado como víctima de Prisión Política y Tortura en el primer informe emitido por la Comisión Valech en diciembre de 2004, por lo que le asiste derecho a los beneficios de reparación dispuestos en las Leyes N°s 19.992 y 20.874.

Acto seguido transcribe el detalle de dichos montos asociados al actor, Pensión Ley 19.992 Periodos 01-1994-2006: \$total 14.205.518.-; Pensión Exonerado Ley 19.234 Periodo 07-2006-05-2018 \$24.388.244.-; Aguinaldo \$576.978; Bono Opción \$3.000.000.- total por pensión de exonerado, más aguinaldo y bono \$27.975.222.- Monto Global Percibido \$42.180.740.-

Seguidamente, refiere reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explicando que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de



Foja: 1

Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Señala que para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Indica que igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Luego, refiere reparaciones simbólicas a las víctimas de violaciones a los DD.HH., mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Agrega que este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Luego, cita doctrina en lo relativo a la naturaleza y forma de reparación satisfactiva del daño moral, manifestando que se ejecutaron diversas obras de reparación simbólica (memoriales, premios, museos, etc), de manera tal que estas han producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue, al haber compensado precisamente aquellos daños, por lo que al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente. Cita jurisprudencia nacional e internacional en apoyo de sus alegaciones. En razón de lo anterior, manifiesta oponer las excepciones de preterición en lo económico y reparación satisfactiva a su respecto, al haber sido ya reparado mediante las reparaciones simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS.

Expone que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH, de manera que tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente. Cita jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

Concluye que estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, incluidos los montos pagados en dinero y la pensión vitalicia otorgada y a



**Foja: 1**

mayor abundamiento, al tenor de documentos oficiales que según dice acompañará en su oportunidad y que acreditarán que el demandante ya fue indemnizado a través de las leyes de reparación, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante de la presente causa.

Seguidamente, opone excepción de prescripción extintiva de la acción civil, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo código. Manifiesta que de acuerdo a lo expuesto en la demanda, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió el actor, ocurrió desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el año 1975. Agrega que entendiendo suspendida la prescripción durante el periodo de dictadura militar iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 18 de mayo de 2018, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332. En subsidio, opone excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2515 en relación al 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515.

Tras explicar los fundamentos doctrinarios de la institución de la prescripción, argumentando su procedencia en el caso de autos, citando además jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema, argumenta que el principio general es que la acción de responsabilidad civil es prescriptible, y que los tratados internacionales invocados sobre la materia no contienen norma alguna que declare imprescriptible dicha acción, al igual que el derecho interno, de manera que no existiendo norma jurídica expresa, deben aplicarse aquellas previstas en el derecho común, esto es, las relativas a la responsabilidad extracontractual artículo 2332 del Código Civil, no pudiendo aplicarse por analogía las normas sobre imprescriptibilidad de la acción penal.

En lo concerniente al daño e indemnización reclamada por daño moral, manifiesta que en subsidio a las excepciones y alegaciones que esgrime anteriormente, sostiene que de acuerdo a las modernas tendencias sobre daño moral, la premisa consiste en que la regulación del monto de la indemnización nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida. Agrega que en dicha regulación, tampoco pueden invocarse la capacidad económica del demandante y/o demandado, pues el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades. Concluye que



**Foja: 1**

la cifra reclamada por el actor es excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Luego, expresa que en subsidio de las excepciones opuestas, de pago y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el actor por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (N° 19.123, 19.234 y 19.992) y también todos los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales y otros contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. Indica que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, alega que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. En torno a los intereses, expresa que en el hipotético caso que se acoja la demanda, condenando a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Con fecha 19 de junio del año 2018, mediante presentación ingresada por OJV, la parte demandante evacuó la réplica, reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda de autos, y añade que el hecho de haber obtenido pensiones de reparación con arreglo a la ley N° 19.123 por parte de algunos familiares, no es óbice para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un tribunal de la República, lo cual además sería incompatible con la normativa internacional que se aplica con preferencia al derecho interno.

En torno a la excepción de prescripción, sostiene que tratándose de delitos de lesa humanidad, las normas de prescripción de derecho interno no se aplican, dado que se contradicen con la normativa internacional sobre derechos humanos, y que en virtud del artículo 5 de la Constitución, integran el ordenamiento jurídico nacional. Agrega que incluso el derecho interno reconoció explícitamente la existencia de daños y concedió a las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el periodo 1973-1990, comprendidos en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario.



Foja: 1

Con fecha 28 de junio del año 2018, a través de presentación ingresada por OJV, la parte demandada evacuó la dúplica, ratificando la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda de autos y expone lo siguiente:

Expone que el Estado hace esfuerzos para otorgar no sólo una pensión, sino que otros beneficios de salud y educacionales, los cuales representan un costo importante para aquél. Alega que probada que sea la percepción de dichos beneficios, se configura la excepción de pago, ya que la indemnización demandada en estos autos es improcedente, por ser incompatible con los referidos beneficios otorgados por el Estado.

Finalmente, en torno a la prescripción, postula que la jurisprudencia chilena ha confirmado la prescriptibilidad de las acciones civiles indemnizatorias para el caso de delitos de lesa humanidad, citando casos judiciales en apoyo de sus argumentaciones.

Con fecha 11 de julio del año 2018, modificado el 4 de septiembre del mismo año, se recibió la causa a prueba por el término legal, rindiéndose la que obra en la carpeta electrónica.

Con fecha 25 de octubre del año 2018 se citó a las partes a oír sentencia, que luego se dejó sin efecto, requiriendo que el demandante ratificara lo obrado y el mandato conferido ante el tribunal, lo que se cumplió con fecha 7 de marzo pasado.

Con fecha 7 de marzo de 2018, se citó a las partes a oír sentencia.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que en estos autos don Carlos Fernando Abarca Riveros, debidamente representado, deduce en juicio de hacienda, demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por la presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, todos ya individualizados, conforme a los fundamentos de hecho y derecho reseñados precedentemente y que síntesis dicen relación con el secuestro, prisión ilegal y torturas a que fue sometido por agentes del Estado bajo la dictadura instaurada en el año 1973, solicitando en definitiva se condene al demandado al pago de la suma de \$200.000.000.- por daño moral o las cantidades que este tribunal estime en derecho, con los reajustes e intereses correspondientes, con expresa condena en costas.

**SEGUNDO:** Que por su parte el demandado Fisco Chile compareció a la instancia contestando y duplicando la demanda de autos, solicitando en definitiva el rechazo de la demanda en todas sus partes, oponiendo las excepciones de improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizado el demandante, la de reparación satisfactiva del daño



**Foja: 1**

reclamado por éste, y la prescripción extintiva de la acción por haber transcurrido en exceso el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2332 del Código Civil cuya aplicación estima procedente, objetando, en subsidio de todo lo anterior, el monto indemnizatorio exigido por las actoras a título de daño moral, por considerarlo excesivo.

**TERCERO:** Que la presente controversia radica en determinar si en la especie concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial del Estado, y en consecuencia, si el Fisco se encuentra obligado a indemnizar el daño moral reclamado por el actor, fundado en la detención ilegal y torturas que experimentó en el contexto político de la dictadura militar iniciada en el año 1973.

**CUARTO:** Que la responsabilidad civil tiene por finalidad reparar económicamente a la víctima o con mayor precisión, compensar el daño sufrido por ésta como consecuencia de un hecho ilícito. En este sentido, lo que se busca es proporcionar a la víctima, una cantidad de dinero que le permita sobrellevar de mejor manera el daño sufrido, mediante el goce y disfrute de otras cosas, atendido el carácter transaccional de éste. En razón de ello, se dice que la indemnización monetaria no es una genuina reparación, pues no hace desaparecer el daño ni mucho menos el hecho generador de éste, sino que más bien, otorga los medios económicos a la víctima para que ésta encuentre satisfacción en la adquisición de bienes o servicios.

**QUINTO:** Que en lo concerniente a la responsabilidad del Estado y sus órganos, el principio general expresado anteriormente se ha concretizado bajo la institución de la falta de servicio, criterio general de atribución equivalente a la culpa o negligencia que funda la reparación de los daños extracontractuales. De aquí que la doctrina y jurisprudencia, estimen que la responsabilidad civil o patrimonial de los órganos públicos puede ser perseguida, ya sea de acuerdo a las normas de derecho público (Constitución Política de la República, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, etc.), como a partir de la normativa de derecho privado (arts. 2314 y ss. del Código Civil).

**SEXTO:** Que en este sentido si bien en la actualidad, es un lugar común hablar de la unidad de responsabilidades públicas y privadas a fin de garantizar reglas y principios equitativos para los particulares que buscan la reparación de sus daños ocasionados por el Estado, ello no conlleva un desconocimiento de las peculiaridades de las relaciones de derecho público (administrativa, legislativa y judicial), en particular, respecto del complejo contenido y finalidad que el órgano estatal persigue con cada una de sus actuaciones.



Foja: 1

**SÉPTIMO:** Que sin perjuicio de lo anterior, la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados a los actores, encuentra también su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

**OCTAVO:** Que estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

**NOVENO:** Que a fin de acreditar lo correspondiente, el demandante acompañó a la carpeta electrónica los siguientes documentos: 1) copia de antecedentes relativos a solicitud de calificación relativos a don Carlos Fernando Abarca Riveros ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, emitida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos; 2) copia de fragmento de Nómina de personas reconocidas como víctimas elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuya página 547 incluye con el N° 36 a don Carlos Fernando Abarca Riveros, RUN 2.825.876-3.

**DÉCIMO:** Que asimismo, rindió la prueba testimonial en audiencia de fecha 1 de octubre de 2018, consistente en las declaraciones de doña Erika Lorena Bustos Pereira, cédula de identidad N° 10.662.529-8, y don Alfonso Ricardo Cortés Cortés, cédula de identidad N° 10.172.893-5, quienes legalmente juramentados, sin tacha e interrogados al tenor de la interlocutoria de prueba, declararon en síntesis y en lo pertinente lo siguiente:

La testigo Sra. Bustos, expuso que sus padres eran vecinos de don Carlos Fernando Abarca, quien sufrió torturas en el año 1973, que primero





**Foja: 1**

fue detenido en su trabajo, le tomaron declaraciones y luego lo enviaron a su casa. Indica que después del 11 de septiembre, en horas de la madrugada, sintió mucha bulla, por lo que abrieron la cortina, y había muchos militares fuera de su casa y en la casa de don Carlos, que estaba junto a su esposa y sus cuatro hijos; que había gritos, llantos, y los militares apuntaban con sus metralletas a su casa y a la casa de don Carlos; que después de un rato, se fueron, de manera que fueron a la casa de la vecina y ahí se encontraban llorando los niños y la señora. Menciona que les señaló que a don Carlos se lo habían llevado detenido, y que los militares andaban buscando armas, que dejaron todo destruido y los niños llorando, todo lo cual sucedió en Playa Ancha, Valparaíso. Manifiesta que luego de un tiempo, con su madre y la señora del actor, fueron a verlo a un barco llamado Lebu en donde lo tenían detenido en muy malas condiciones, muy golpeado y delgado. Indica que las dejaron pasarle algunas cosas, recordando que había mucha gente detenida y todas estaban en malas condiciones, con golpes y heridas. Señala que el actor estuvo detenido entre 10 a 20 días. En cuanto a los perjuicios, expresa que si los hay, que don Carlos se retrae mucho y que desde que le pasó nunca más volvió a ser la misma persona; que hasta la fecha no duerme bien, y que no le gusta hablar del tema; que tanto a él, como a su familia, se le causó mucho dolor por todo lo que pasaron, no les gusta salir mucho, siempre anda pensativo; que hasta el día de hoy presenta dolores de cuerpo y cuenta que tiene recuerdos de lo que le pasó, ya que él sufrió maltratos en el barco, como simulación de que lo iban a matar. Señala que no tenían las condiciones como por ejemplo, para ir al baño, no tenían comida los primeros días, sufrió golpes, corrientes., etc. Finaliza diciendo que el perjuicio más grande fue el moral, como persona, como ser humano, y que no hay monto de dinero suficiente para reparar el daño causado, pues sufrió él y su familia, lo tuvieron detenido, lo torturaron, no le dieron de comer, y que además fue exiliado.

El testigo Sr. Cortés, declaró que don Carlos fue detenido durante el mes de septiembre del año 1973, en una primera instancia por la Fuerza Aérea, posteriormente, dentro del mismo mes fue tomado detenido nuevamente, sacado de su casa con mucha violencia, destruyendo sus enseres, sufriendo mucho maltrato, y luego de esto fue llevado al buque Lebu, donde fue vejado, torturado, muy maltratado, tanto física como psicológicamente, también simularon su fusilamiento. En cuanto a los daños, expresa que se le generó un daño moral y que don Carlos, aparte de las torturas que sufrió estando detenido, debió partir con su familia fuera de Chile a rearmar su vida; que no obstante presenta hasta ahora una secuela, no tiene un buen sueño, no anda jamás de noche, sufre crisis de ansiedad, y es muy retraído.



Foja: 1

**UNDÉCIMO:** Que de otro lado, la parte demandada acompañó a la carpeta electrónica, copia de documento expedido el 31 de mayo del año 2018 por la Unidad Valech, Rettig y Otras leyes reparatorias asociadas al actor, que en total suman la cantidad de \$42.180.740.-

**DUODÉCIMO:** Que son hechos establecidos en la causa, al no haber sido controvertidos por las partes y por encontrarse además acreditados con el mérito de la instrumental producida por la demandante, de conformidad a lo prescrito por los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, y la prueba testimonial reseñada en el motivo 10º, que en el contexto del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, don Carlos Fernando Abarca Riveros, de 44 años de edad en ese entonces, delegado sindical de la Planta Ventanas de Chilectra, Militante Partido Comunista, casado y padre de dos hijos, fue detenido por primera vez el 12 de ese mismo mes por militares de la FACH, en su lugar de trabajo ubicado en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso. Luego, de ser aprehendido, fue conducido a la Base Aérea Quintero de la FACH, siendo liberado el mismo día.

Luego, con fecha 20 de septiembre de 1973, don Carlos Fernando Abarca Riveros, fue aprehendido por militares por segunda vez, ahora en su domicilio de Camino Quebrada Verde N° 240, Valparaíso, quienes allanaron su casa utilizando armas, en la cual se encontraba su esposa y sus dos hijos, siendo llevado al Regimiento Maipo, conduciéndolo con posterioridad al Buque Lebu (Valparaíso), lugar en que fue interrogado reiteradamente sufriendo golpes de pies y puños durante 8 días, practicándose incluso un simulacro de fusilamiento, hasta que fue liberado en muy malas condiciones y delgado.

En este contexto, el actor Sr. Abarca continuó trabajando, pero siempre sufriendo amenazas. Con fecha 22 de julio del año 1975, el demandante fue detenido por tercera vez en el Aeropuerto Cerrillos por funcionarios de la Policía Internacional, cuando iba a viajar a Buenos Aires a ver a su hijo, siendo conducido al Cuartel General Mackenna, para posteriormente el mismo día ser llevado a Valparaíso, a la Academia de Guerra Naval, donde estuvo detenido por tres días, siendo interrogado en dicho lugar.

**DÉCIMO TERCERO:** Que en relación al primer supuesto, esto es, la existencia de un hecho antijurídico, conforme a la naturaleza de la materia y hechos sobre los que versa la litis, cabe consignar que del mérito de las probanzas reseñadas en los motivos anteriores, ha quedado acreditado en autos, que efectivamente el actor fue detenido en mas de una ocasión, sin causa jurídica y de forma ilegal por agentes del Estado, siendo torturado en por estos, prolongándose la segunda de las detenciones por varios días, en que fue sometido a interrogatorios y vejámenes.



Foja: 1

**DÉCIMO CUARTO:** Que las conductas descritas dan cuenta de la comisión de actos ilegales y arbitrarios, que afectan lo más esencial de los seres humanos, como la vida, la libertad y dignidad y que por su extensión y alcance trascienden al propio individuo, afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en el concepto de delito de lesa humanidad.

**DÉCIMO QUINTO:** Que en efecto, consta en la documental ofrecida, que el actor fue reconocido como víctima de violaciones a los derechos humanos como consta en los registros de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, así como de los registros del propio Instituto de Previsión Social, antecedentes que dan pruebas irrefutables de la detención y posterior permanencia del actor en varios centros de tortura en Valparaíso (Base Aérea Quintero de la FACH, Buque Lebu, Cuartel General Mackenna y Academia de Guerra), circunstancias y antecedentes que permiten a esta juez tener por probada la existencia de los hechos antijurídicos que se invocan.

**DÉCIMO SEXTO:** Que seguidamente, los perjuicios alegados y sufridos por el actor aparecen como consecuencia natural y lógica de todo lo vivido, detención ilegal, tortura física, psíquica, todos hechos que indudablemente afectan de sobremanera la vida de cualquier persona, provocando entre otras cosas, trabas para la estabilidad emocional familiar y social, circunstancias acreditadas por la prueba testimonial rendida en autos, donde los dos testigos contestes, que conocen al Sr. Abarca, manifestaron que el actor, antes de ser víctima de los graves hechos constitutivos de violación a los derechos humanos, era activo, lleno de vida, feliz con su familia, pero que después de ello, pasó a ser una persona temerosa, con trastornos del sueño y ansiedad, y que hasta el día de hoy no se recupera del trauma de haber sido detenido ilegalmente y vejado por agentes del Estado, circunstancias que han repercutido indiscutiblemente en su vida, a tal punto que según relatan, tomó la determinación de irse del país -siendo incluso detenido de nuevo- para radicarse en Argentina, disgregando su familia y asentamiento.

Luego, huelga señalar que tales antecedentes dan cuenta del vínculo causal entre los hechos delictivos acreditados y el daño padecido por el actor, puesto que de no mediar lo primeros jamás se habrían producido los segundos.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que habiéndose acreditado la existencia del daño moral que se reclama de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde pronunciarse sobre las defensas de la demandada.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que en relación al daño moral cabe señalar que en su contestación el Fisco de Chile ha indicado que el demandante es



Foja: 1

beneficiario de las Leyes N° 19.992 y 19.234 que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a las personas afectadas por violaciones a los Derechos Humanos, pretendiendo con esto alegar además de otras prestaciones que detalladamente reseñaran en la expositiva, la suficiencia de pago.

**DÉCIMO NOVENO:** Que con dicha alegación el Fisco reconoce en el caso concreto una necesidad de reparación y como consecuencia de ello un daño, que esta sentenciadora entiende corresponde al daño moral atendida la afección que cualquier ser humano tendría de ser expuesto a situación de tortura y vejámenes a los derechos humanos.

**VIGÉSIMO:** Que efectivamente, tal como lo señala el demandado al contestar la demanda se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentren en la situación como la del demandante. Dichas reparaciones han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de cada ser humano que haya sido sujeto a apremios ilegítimos en dicho período. Sin perjuicio que tal como lo señalara la demandada, el monto global atendida la cantidad de personas en dicha situación en nuestro país alcanza una suma importante de dinero para el Estado Chileno, ello no configura lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derecho Humanos que obliga al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, esto es a cada persona en específico.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que si bien el actor, no controvertió el hecho de ser beneficiario de una pensión otorgada por el Estado en los términos expresados en el motivo anterior, y por el contrario, reconociendo tal hecho, esta sentenciadora no considera acorde a la norma internacional mencionada que obliga al Estado chileno en virtud del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, por lo que se desestimaré la alegación de suficiencia de pago, sin perjuicio que tales cantidades recibidas por el actor, serán consideradas al momento de establecer el quantum indemnizatorio como se dirá más adelante.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que en torno a la excepción de *prescripción extintiva* de la acción, incoada plateada por la demandada, huelga tener presente que el hecho que motiva esta acción, es de aquellos que la doctrina y tribunales superiores de justicia reconoce como graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en el motivo 12° ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se vulneraron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de



Foja: 1

entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que cabe precisar que la acción indemnizatoria que se deduce se encuentra sustentada en las torturas acreditadas que ha sufrido el actor por el Estado Chileno con enorme poder de coerción y uso de fuerza, vulnerándose con aquello lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma última que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes que así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a índole humanitaria proveniente de los derechos de todos ser humano reconocidos en el tratado internacional indicado, que prima de acuerdo a las normas de derecho interno en específico al artículo 2497 del Código Civil.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que por otro lado sustenta la tesis de inaplicabilidad de la norma del Código Civil antes mencionada por el artículo 2º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5º de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

En efecto, ya la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, por lo que resultaría incoherente entender que la acción de reparación está sujeta a normas de prescripción, puesto que ello atenta los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito.

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que dado que los Derechos Humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el



Foja: 1

mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

Por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que de otro lado, debe tenerse presente que no nos encontramos frente a una acción de indemnización de perjuicios “común” que derive de relaciones contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que como se dijo, nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el *ius cogens*, propias del Derecho Internacional; así y de acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, es así que habiendo ratificado Chile la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma, que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que por otra parte el artículo 2332 del Código Civil señala que: “*las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto*”; el artículo 2514 señala que: “*la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible*”; finalmente el artículo 2515 de igual cuerpo legal señala que el tiempo es de 5 años para las acciones ordinarias.



Foja: 1

**VIGÉSIMO NOVENO:** Que en ese contexto, el estatuto del derecho privado chileno regula relaciones entre particulares, regidas por los principios de la autonomía de la voluntad y en plano de igualdad, cuestión inaplicable al caso *sub lite*, donde se busca regular y sancionar en el ámbito de derecho público, relaciones verticales del Estado con los particulares, determinando las responsabilidades que éste tenga por las afectaciones de derechos por parte de sus agentes.

**TRIGÉSIMO:** Que resulta inconcuso que tratándose del resarcimiento de las transgresiones a los Derechos Humanos, la fuente de responsabilidad civil o el estatuto aplicable, no puede encontrarse en nuestro Código Civil, toda vez que las normas de regulación y protección de tales derechos son posteriores a nuestra codificación, y las ahí contenidas no fueron concebidas por Bello para la solución de problemas contemporáneos, como el de marras, para los cuáles ha devenido el desarrollo de nuevas concepciones al amparo del Derecho Internacional, el que incorporado en virtud del artículo 5º de nuestra Constitución Política, resulta absolutamente vinculante y obligatorio.

**TRIGÉSIMO PRIMERO:** Que así, en el caso *sub lite*, la detención y torturas propinadas al actor por razones políticas constituye en el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo en forma extrajudicial, al margen de la juridicidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de *Ius Congens*, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna.

**TRIGÉSIMO SEGUNDO:** Que en efecto, el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando haya violación de un derecho o libertad habrá derecho al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, y el artículo 1.1 trata de las obligaciones de respeto y garantía por parte de los Estados partes de las disposiciones contenidas en tal pacto, relativas al respeto y protección de derechos fundamentales.

**TRIGÉSIMO TERCERO:** Que así resulta inocuo aplicar las normas del Código Civil y declarar prescritas acciones indemnizatorias ordinarias emanadas de violaciones a derechos fundamentales, por ser contrarias al orden jurídico internacional, que traducido en Convenios y Tratados y por clara disposición constitucional, son vinculantes para Chile, como ha reconocido y declarado abundante jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, entre otros, en el homicidio de Fernando Vergara, los denominados caso Liguña, Caravana de la Muerte -capítulo



Foja: 1

San Javier-, Secuestro y Desaparición de Darío Miranda Godoy y Jorge Solovera Gallardo y secuestro y desaparición de Sergio Tormen Méndez.

**TRIGÉSIMO CUARTO:** Que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República establecen los principios de igualdad ante la ley de gobernantes y gobernados, siendo responsables tanto de sus acciones como de sus omisiones, asimismo el artículo 4º de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala que éste será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado, normas que en conjunto con los tratados internacionales vigentes en Chile, reafirman el deber de responder y resarcir los daños, normas que carecerían de toda validez y operatividad de aplicarse las reglas y plazos del derecho común a materias de tan alto dolor y conocimiento público, como son las violaciones a los Derechos Humanos.

**TRIGÉSIMO QUINTO:** Que por lo señalado precedentemente, esta sentenciadora estima que los cómputos de los plazos establecidos en los artículos 2332 y 2515 no son aplicables en la especie, entran en directa contradicción con normas internacionales, normas de *Ius Cogens*, el Derecho Consuetudinario y el Derecho Constitucional, desechándose así la prescripción invocada por la demandada.

**TRIGÉSIMO SEXTO:** Que así las cosas, desechadas que fueren las defensas fiscales, y establecida la existencia del ilícito y su relación causal con los daños y perjuicios invocados, y a la luz de las declaraciones de los dos testigos contestes, sin tacha, y que dieron razón de sus dichos, no cabe sino dar lugar a la acción indemnizatoria solicitada respecto del daño moral sufrido por el actor, que se funda en el hecho de haber sido detenido ilegalmente por tres veces, la primera vez liberado el mismo día, la segunda al octavo día y la tercera al tercer día, siendo sometido a golpes, torturas y malos tratos, daño que esta sentenciadora estima prudencialmente en \$20.000.000.- atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fuera sometido el demandante, tanto que fuera reconocido como víctima del Estado Chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, lo que naturalmente conlleva gran dolor y aflicción que provocan en un ser humano sujeto a aquellos, no sólo dolor físico inmediato sino que además un estado de vulnerabilidad interna con efectos permanentes, que incluso lo obligaron a abandonar el país junto a su familia, y con las secuelas psicológicas que aun padece.

Que asimismo, cabe señalar que esta sentenciadora también consideró en la cuantificación de la reparación civil señalada en el párrafo anterior, el hecho que el actor Sr. Abarca, ha recibido prestaciones pecuniarias según consta en detalle proveniente el Instituto de Previsión Social acompañado a





Foja: 1

la carpeta electrónica. En este sentido, se advierte que el demandante a mayo de 2018, ha sido beneficiario de dos pensiones una entre enero de 1994 a junio de 2006 por la suma de \$14.205.518.- y otra entre julio de 2006 a mayo de 2018 por la cantidad de \$24.398.244.-, un bono equivalente a \$3.000.000.- y aguinaldo por \$576.978.- sumando un total a la fecha \$42.180.740.- y una pensión actual de \$205.266.-, de manera que dichos pagos si bien no son aptos para enervar la acción indemnizatoria, si fueron considerados al momento de ponderar y avaluar el daño moral.

**TRIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

**TRIGÉSIMO OCTAVO:** Que atendido el carácter declarativo del proceso, la suma ordenada pagar sólo devengará intereses y reajustes, una vez que se encuentre firme o ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

**TRIGÉSIMO NOVENO:** Que atendido el mérito de lo razonado anteriormente y habiendo resultado mayormente vencido el demandado, se le impondrá el pago de las costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación del daño y de prescripción decididas por la demandada;

II.- Que se acoge la demanda de fecha 23 de abril de 2018, en cuanto se declara que el demandado es responsable civilmente por los hechos de que fue víctima don Carlos Fernando Abarca Riveros acaecidos entre los años 1973 y 1975, debiendo el Fisco pagar la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por daño moral;

III. – Que la suma ordenada pagar devengará reajustes e intereses desde que el presente fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo.

IV.- Que se condena en costas al demandado.

Regístrese, notifíquese, consúltese sino se apelar.-



DICTADA POR DOÑA ROCIO PÉREZ GAMBOA, JUEZ  
TITULAR. AUTORIZA DOÑA MARIELLA RISOPATRON CERNA,  
SECRETARIA SUBROGANTE.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162  
del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de Marzo de dos mil diecinueve**

